



Por qué la carestía de granos en Costa Rica

CARLOS ARAYA

La crisis de las reservas de alimentos que enfrenta el mundo actualmente no es espontánea ni reciente. Por el contrario, es la consecuencia lógica de una serie de decisiones político-económicas tomadas por el *consenso de Washington*, desde los años ochenta, mediante la aplicación de los programas de ajuste estructural. En ese contexto, se indujo a los gobiernos de países en desarrollo a dejar de lado la producción de granos básicos con el argumento de que los productores de países desarrollados eran más eficientes, que obtenían mejores rendimientos, que la producción sobrepasaba sus necesidades locales y que los productos eran más baratos en el mercado internacional. En fin, los gobiernos fueron convencidos por los economistas para hacer la seguridad alimentaria nacional dependiente de ese mercado de excedentes de los países desarrollados.

En los últimos años, la agricultura mundial también ha sido fuertemente presionada por otros factores que exacerbaban la carencia de alimentos: la crisis energética, el aumento desproporcionado del precio de los combustibles con base en petróleo, la canalización de los granos y de importantes áreas de cultivo hacia la producción de biocombustibles, las condiciones de cambio climático, el aumento en el costo de los principales insumos agrícolas, la enorme demanda de alimentos de economías emergentes como China e India y los límites de la frontera agrícola. Esta situación agravó o, más bien, evidenció el problema de la producción de alimentos para satisfacer la demanda de la población -rubro en permanente crecimiento en América Latina-, y el riesgo tan alto de depender de mercados internacionales oscilantes y volátiles. Y Costa Rica está inmersa en ese escenario mundial.

Retomando el origen y evolución de la crisis y trasladándola al ambiente local, desde mediados de los años ochenta, en atención a los programas de ajuste estructural, el Gobierno de Costa Rica emprendió la reestructuración del sector agrícola, continuada por los gobiernos sucesivos, que a lo largo de dos décadas redujeron el presupuesto y el personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (reubicación institucional, movilidad laboral, facilitación de retiro), cerraron algunas agencias de extensión, limitaron la investigación y la extensión agrícolas, eliminaron programas de mejoramiento de cultivos, suspendieron los servicios de diagnóstico, fusionaron oficinas e instituciones del sector cambiando sus funciones y no renovaron la flota vehicular de acuerdo con las necesidades reales. Además, la estrategia incluyó otras instituciones del sector como el Consejo Nacional de Producción, donde también redujeron el presupuesto, disminuyeron el personal (mecanismo semejante al anterior), cambiaron su función de abastecimiento y control de producción de granos y eliminaron el apoyo técnico a pequeños productores. Otras instituciones que sufrieron los embates de la reestructuración fueron el Instituto de Desarrollo Agrario, el sistema bancario nacional, que abandonó el apoyo de servicios financieros para los pequeños productores, y el Instituto Nacional de Seguros, que eliminó el seguro de cosechas. Por el contrario, las nuevas políticas de gobierno favorecieron a las grandes compañías agroexportadoras, estimularon el cultivo de productos no tradicionales para el mercado internacional (flores y frutas) y se dejó la fijación del precio de los granos a las fuerzas del libre mercado (competencia con cultivos subsidiados).

Recientemente, con un desconocimiento preocupante de la realidad mundial y del país, un ministro de Agricultura y Ganadería arengó a los productores de granos de Pérez Zeledón a dejar de sembrar maíz y frijol y dedicarse a cultivos más “rentables”. El mismo presidente Arias, en un acto público en Orotina, mencionó que en pocos años ese cantón será “fundamentalmente de servicios, ya no va a ser agrícola, y ciertamente a nadie se le va a ocurrir aquí sembrar granos como en el pasado” (*La Nación* 29-3-2008). Estas posiciones de las autoridades gubernamentales reflejan de manera diáfana que la política agrícola del país sigue atendiendo al modelo impuesto en los años ochenta, que ha llevado a los productores, principalmente a los pequeños y medianos, al abandono de la actividad y a la venta de sus tierras, con los consecuentes problemas sociales y económicos en las zonas rurales.

Sin embargo, las luces de emergencia se encendieron en todo el mundo cuando la Organización de Naciones Unidas, Fao, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, desde abril pasado, alertaron sobre el incremento de los precios de los alimentos y la amenaza de aumentar en 100 millones la población pobre del mundo. Esto hizo conciente al Gobierno de la realidad de la crisis y a comprometerse a afrontar el problema con medidas urgentes para reducir el efecto que pueda tener en la población, especialmente la de los estratos sociales más bajos. Para ello gestionó un préstamo ante el Banco Centroamericano de Integración Económica por 60 millones de dólares, como parte de un programa nacional de alimentos que incluye ayuda social a los sectores más vulnerables, programa que

tendrá por parte del estado tico una contraparte de 44 millones de colones. En términos de abastecimiento de granos, se pretende, para el año 2010, satisfacer el 80 por ciento de las necesidades de arroz, el 70 por ciento de las de frijol y el 70 por ciento de las de maíz blanco. Asimismo, se destinará 4.000 millones de colones del presupuesto extraordinario para financiar un sistema que permita el subsidio escalonado de primas de seguros de cosecha para el cultivo de granos. Por otro lado, se acelera la puesta en marcha del sistema de banca para el desarrollo, que supone una fuente importante de crédito para pequeños y medianos productores de arroz, maíz y frijol. En síntesis, el Gobierno emprendió una fuerte política de apoyo a la producción de granos en el país.

La propuesta del Gobierno puede ser exitosa y las metas de producción alcanzables, pero es necesario dimensionar la magnitud y los alcances de las medidas. En el caso del arroz, por ser un cultivo tradicionalmente en manos de grandes productores, la meta de 73.267 ton adicionales es posible; se procura incrementar el área de siembra de 48.000 a 70.000 ha para disponer de 179.520 ton de grano pilado por año. Las expectativas deben ser más conservadoras para el frijol, cultivo mayoritariamente en manos de pequeños y medianos productores con serios problemas de tenencia de tierra y limitado acceso a financiamiento; la meta en frijol está fijada en aumentar el área de siembra de 10.000 a 35.000 ha, que con un rendimiento esperado de 0,9 ton/ha abastecerá alrededor de 31.500 ton (70 por ciento de consumo nacional). Caso especial es el maíz blanco, del que se produce solo para el 25 por ciento de las necesidades del país; de éste se espera sembrar 20.000 ha para cumplir la meta (a pesar de que no es considerado en el plan, el maíz amarillo tiene un mayor impacto en la alimentación animal y en el costo de los alimentos cárnicos y lácteos). El caso del maíz blanco merece un análisis aparte y las expectativas de producción deben ser menos ambiciosas; su cultivo lo desatendió completamente el Gobierno desde hace unos diez años y el programa de mejoramiento desapareció, razones por las que no se cuenta con productores ni tierras para la siembra.

En la actual coyuntura, con la estructura de producción de granos desmantelada tras dos décadas de constricción dirigida, se requiere esfuerzos adicionales simultáneamente en varios flancos para recobrar el funcionamiento óptimo del sistema. Para los tres cultivos de interés se debe recuperar el recurso genético disponible en el país, iniciar programas de evaluación y selección de germoplasma con características agronómicas deseables, incrementar la disponibilidad y la calidad de la semilla a distribuir (desde semilla genética hasta autorizada), identificar las instituciones, oficiales o no, responsables del seguimiento a las diferentes etapas de producción e implementar políticas de crédito para pequeños y medianos productores. Aun así, queda pendiente el insumo básico para la producción de alimentos: el suelo. Es crítico diseñar mecanismos para recuperar las tierras abandonadas, cedidas a las grandes compañías o dedicadas a cultivos secundarios, para incorporarlas en el programa de producción de alimentos (éste podría ser un factor limitante en las expectativas de aumento de áreas de siembra). Además, es preciso el estricto cumplimiento de la legislación para impedir la venta o cesión de tierras por parte de parceleros del Instituto de Desarrollo Agrario a las grandes compañías agroexportadoras.

En términos de estrategia de país, más que medidas locales urgentes para paliar el impacto del desabastecimiento de alimentos en el mercado mundial (actual política de gobierno), la coyuntura actual demanda una política de estado que garantice la disponibilidad y acceso a los alimentos por parte de toda la población, y que ésa sea sostenible a futuro. Es preciso que se valore elevar la seguridad alimentaria del país a rango constitucional y se implemente leyes que garanticen mecanismos de control y promoción de la producción de alimentos básicos para la población. Porque el plan de alimentos propuesto tiene alcance al año 2010, pero la crisis no acaba ese año, solo el Gobierno.



Ricardo Garibay

